

## **¿Y la reforma de gran calado a la ley procesal electoral?**

**Por: Abraham Giovanni Hernández González**

En las últimas tres décadas hemos tenido un cúmulo importante de reformas electorales (siete para ser exactos) que han trastocado no sólo a las instituciones electorales, sino que han establecido verdaderos cambios en la forma de organizar y desarrollar la jornada electoral, en la etapa de resultados y declaración de validez de la elección, así como en los propios procesos impugnativos ante las instancias administrativas como jurisdiccionales. Sin embargo, la instancia impugnativa ha sido la más olvidada en las modificaciones constitucionales y legales que se han hecho.

El actual sistema de medios de impugnación en materia electoral (federal) data de 1996, fecha en la que se expidió la Ley general que los regula. De ese momento a la fecha (20 años después) se han registrado dos reformas, una en 2008 y otra en 2014 que han ampliado la procedencia del juicio ciudadano, han creado un procedimiento sancionador en sede jurisdiccional y su respectivo recurso de revisión, el reconocimiento de la legitimación de los candidatos independientes, así como la implementación de las nuevas causales de nulidad de una elección, entre otras.

No obstante, estas reformas no se han hecho cargo de la actualización de los supuestos de procedencia de los ocho medios de impugnación previstos en la ley, puesto que en una tutela amplia de derechos la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha ampliado los casos en que los ciudadanos, partidos políticos, coaliciones, comunidades indígenas, aspirantes, candidatos entre otros pueden acudir a la tutela del órgano jurisdiccional.

La realidad de las dos recientes reformas electorales es que han sido, tal vez, las modificaciones del mayor calado que hemos tenido en la historia reciente del sistema electoral mexicano. No sólo por el cambio radical del modelo de comunicación política y por la nacionalización de las elecciones, sino por las más de 100 nuevas facultades que se han atribuido al Instituto Nacional Electoral (INE). Estas modificaciones no fueron consideradas para hacer una revisión de los medios de impugnación, puesto que los diversos actores políticos, si así lo consideran, tiene la opción de acudir a las instancias jurisdiccionales para que decidan si fue correcta la acción de la autoridad administrativa.

Esto hecho ha sido un vacío que dejó el legislador, quien no imaginó que al hacer cambios a la sustantiva también tendría que hacerlos a la adjetiva, sino para las propias autoridades electorales, quienes han tenido que resolver en la práctica lo no previsto en la ley, tal y como pasará con los procesos impugnativos de la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos, coaliciones y candidatos, con la falta de implementación de un proceso para designar magistrados electorales locales, la armonización de plazos entre las impugnaciones locales y las federales o las controversias entre el principio de paridad y los sistemas electorales adoptados en las entidades federativas (antinomia entre el artículo 41 y 116 constitucionales), etcétera.

En concreto, la ponencia que se propone plantea la falta de revisión de los medios de impugnación y de la adecuación que debe existir entre la labor administrativa y la judicial para que aspectos como la fiscalización, la armonización entre medios de impugnación locales y federales, la designación de magistrados electorales locales y la paridad en el registro de candidatos pueden arrojar sus mejores resultados.

La ponencia propone evidenciar la falta de armonización legislativa en estos cuatro tópicos, de manera que, se revise el tiempo y plazos para que el nuevo accionar pueda ser impugnado y, de ser el caso, acatado el mandato judicial sin que perjudique el quehacer institucional. También se propone una solución a estas problemáticas.